

MOZAMBIQUE: la expansión del yihadismo en el sur de África

Un grupo fundamentalista local vinculado al *Daesh* ha consolidado su control en Cabo Delgado, provocando casi 3.000 muertes y cerca de 700.000 desplazados

5 de octubre 2017. Un ataque múltiple a varias dependencias locales y policiales en Mocimboa da Praia, en la provincia septentrional de Cabo Delgado (Mozambique), dejó un balance de 17 víctimas mortales, depósitos de munición saqueados y la ciudad ocupada por los asaltantes. Días después, el grupo fundamentalista *Ansar al-Sunna Wa Jamma* (ASWJ) —nombrado por la población como *Al Shabaab* (los jóvenes) pero sin relación constatada con su homónimo en Somalia, y que tiene un marcado carácter autóctono— reivindicó el atentado, lo que supuso el inicio de su campaña de terror yihadista en el país.

Desde entonces, la expansión del extremismo violento ha sido tan vertiginosa como sanguinaria: en menos de cuatro años, y según Naciones Unidas, ha dejado un dramático balance de más de 2.600 muertos (entre ellos, 1.300 civiles), casi 700.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, y al menos 1,3 millones en toda la región —la más subdesarrollada y olvidada del país, pero rica en recursos naturales, especialmente gas— necesitan asistencia humanitaria y sanitaria urgente, así como protección inmediata para sobrevivir al yihadismo. Mientras los secuaces de *Al Shabaab* —aliados con la doctrina y

los procedimientos del autoproclamado Estado Islámico (*Daesh*), al que juraron lealtad en 2019— manifestaban su intención de convertir Cabo Delgado y las provincias limítrofes en el bastión yihadista más meridional de África, las



Dominio público

Imagen propagandística de un vídeo de *Ansar al-Sunna Wa Jamma*.

fuerzas de seguridad y unidades militares de Mozambique se mostraban ineficaces para enfrentar el terror islamista, impedir la destrucción de hospitales y colegios, o asegurar las zonas próximas al incipiente proyecto gasístico internacional. Al tiempo, distintas organizaciones humanitarias les acusaban de constantes violaciones de derechos humanos, ejecuciones y detenciones extrajudiciales. Tampoco la presencia de compañías privadas de seguridad de Rusia, siempre negada por Moscú, y de Sudáfrica ha sido suficiente para neutralizar la creciente amenaza.

Desde la capital, Maputo, y lejos de reconocer la gravedad de la situación en el norte del país, el presidente Filipe Nyusi —en el poder desde 2015— ha defendido, por demasiado tiempo, que la situación estaba bajo control y no era necesaria intervención exterior para erradicar la afrenta terrorista. En la actualidad, frente a la alarmante situación que atraviesa Mozambique y toda la región, la comunidad internacional ha comenzado a desplegar su apoyo militar para responder a la llamada de auxilio del Gobierno nacional. Sin embargo, y en un escenario que comparte muchos parámetros con el Sahel Occidental y el Cuerno de África, la solución contra la violencia yihadista en Mozambique no se puede limitar a acciones en el ámbito



Cientos de personas huyen en julio del pasado año de la violencia yihadista hacia el puerto de Pemba, en la región de Cabo Delgado.

Ricardo Franco/EFE

de la seguridad, absolutamente ineficaces si no van acompañadas de medidas que generen más gobernanza, desarrollo y justicia.

UN ESTADO IMPERFECTO

Desde su independencia oficial del poder colonial portugués en 1975 tras una década de lucha por la emancipación, la historia de Mozambique se ha escrito en términos de pobreza, subdesarrollo y mal gobierno. Carente de cualquier proyecto nacional, las nuevas autoridades soberanas conformaron un régimen republicano caótico y se aferraron a la violencia como arma de poder.

En apenas dos años, en 1977, la población mozambiqueña se sumió en una destructiva guerra fratricida entre el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) y la opositora Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO). Después de quince años, en 1992, los contendientes firmaron un frágil acuerdo de paz en Roma que, lejos de inaugurar un periodo de estabilidad y prosperidad, se tradujo en más corrupción, desigualdad y frustración social, siempre bajo la hegemonía del omnipresente FRELIMO: el partido político que se ha proclamado vencedor en todas las convocatorias electorales desde

1994, oficialmente multipartidistas. Con el trasfondo de una latente tensión bélica de menor intensidad, los comicios de finales de 2014 reeditaron la victoria de FRELIMO —con un 57 por 100 de los votos, lejos de la mayoría aplastante de todas las elecciones precedentes— y convirtieron a Filipe Jacinto Nyusi en el nuevo presidente nacional. Sin embargo, su ascenso al poder no frenó la reivindicación armada, especialmente en el subdesarrollado y olvidado norte del país. Esta que obligó a mantener las sempiternas negociaciones de paz, que se sellaron con un cese definitivo de las hostilidades en mayo de 2017, y, finalmente, con el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida pública de las fuerzas de RENAMO, que

*El 12 de julio,
la UE aprobó
una misión de
formación en
Mozambique*

poco ha avanzado en los últimos años. En este convulso escenario, Filipe Nyusi fue reelegido en 2019, tras una campaña electoral marcada por el nuevo Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional de Maputo, y en la que la preocupante situación que atravesaba el norte del país, cada vez más asfixiado por la insurgencia rebelde, el extremismo yihadista y la represión gubernamental, fue completamente ninguneada.

Desde la independencia nacional, en la región más septentrional de Mozambique se ha generado —a fuego lento— el sustrato perfecto para la eclosión de un pretendido fundamentalismo islamista que, para una minoría de la población local, se ha convertido en excusa y válvula de escape a su frustración social. En la provincia de Cabo Delgado, ahora epicentro del yihadismo regional, convive una sociedad extremadamente joven —carente de expectativas de vida a pesar de los ingentes recursos naturales, principalmente rubíes y gas natural— con la eterna rivalidad étnica, muchas veces violenta, entre los *Mwani* (mayoritarios, musulmanes, costeros, y seguidores de RENAMO) con los *Makonde* (del interior, cristianos y partidarios de FRELIMO). Por último, la población local percibe que Maputo siempre ha desatendido sus necesidades más



João Reis/EEF/EPA

Soldados del Ejército de Mozambique inspeccionan una zona a las afueras de la ciudad de Palma tras la invasión de *Al Shabaab* a esa localidad en marzo de 2021.

básicas, por lo que se siente ultrajada y menospreciada por el poder central. Además, recientemente, ha comenzado a percibir que el enorme proyecto gasístico que se levantaba en sus costas —liderado por la empresa francesa Total— iba a dejar poca riqueza en sus hogares, e iba a poner en peligro su modo tradicional de supervivencia: el comercio, la agricultura y la pesca.

En este contexto, mientras las arcas nacionales crecían a una media del 7 por 100 desde principios de siglo, sin beneficio alguno para los más desfavorecidos, el *wababismo* violento comenzó a prender entre una minoría de la población musulmana de Cabo Delgado. En 2007, Sheikh Sualehe Rafayel, local pero radicalizado en Tanzania, formó su propio grupo extremista —como señala el experto Eric Morier-Genoud— y emprendió una rebelión armada contra las instituciones islamistas y el propio Consejo Islámico de Mozambique que, con el apoyo del Estado, intentó neutralizarlo sin éxito.

Diez años después, el yihadismo tomó carta de naturaleza con su primer ataque en Mocimboa da Praia; y la secta fundamentalista ASWJ o *Al-Shabaab* —formada por muchos jóvenes locales adiestrados en países africanos y del Golfo— inició su acción terrorista con el objetivo de imponer una férrea ley islámica en la región y sus alrededores. En poco tiempo, con un discurso de des-

crédito contra el aparato estatal y promesas de una vida mejor bajo el poder yihadista, los extremistas violentos consiguieron captar y adoctrinar a muchos adeptos, pero también forzaron a una población aterrorizada, principalmente jóvenes, mujeres y niños, a unirse a su proyecto violento.

CONEXIÓN CON DAESH

Desde 2017, la frecuencia y crueldad de los atentados yihadistas, así como su extensión geográfica, se han incrementado de forma exponencial, al mismo ritmo que su capacidad ofensiva y la complejidad de sus procedimientos. En agosto de 2020, los extremistas de *Al Shabaab* tomaron, por primera vez, la ciudad portuaria de Mocimboa da Praia, que retuvieron durante meses. Además, saquearon las mercancías de barcos pesqueros y pequeños buques en

El grupo Al Shabaab de Mozambique es extremadamente cruel con la población civil

las aguas próximas a la costa, y provocaron el éxodo masivo de su población.

No obstante, el punto de inflexión de la arremetida yihadista llegó en marzo de 2021, cuando los terroristas invadieron la ciudad de Palma, una localidad de 75.000 habitantes donde se levanta el macroyecto gasístico liderado por Total, que ha cerrado sus instalaciones tras este ataque. Durante el asedio, y aunque la ausencia de medios de comunicación impidió conocer la magnitud de la tragedia, más de una docena de personas fueron asesinadas —entre ellos, varios extranjeros— y más de 17.000 huyeron de sus hogares. Además, con este ataque han asestado, por primera vez, un duro golpe a las inversiones extranjeras en la región, que eran la única esperanza de vida y desarrollo de la población local. Y todo ello, como señala la periodista e investigadora Zenaida Machado desde el terreno, en medio de una escalada de violencia atroz contra personas indefensas: «han estado decapitando gente, en algunos casos de forma masiva, además de destruir propiedades y escuelas».

En cuanto a su estructura, el grupo *Al Shabaab* —liderado, según Estados Unidos, por Abu Yasir Hassan— se organiza en células que actúan de forma autónoma, aunque supuestamente rinden cuentas a un Consejo Supremo, responsable de la estrategia terrorista y de la custodia de la ideología islamista. Por otro lado, todos los indicios apuntan a la naturaleza autóctona del extremismo violento de Cabo Delgado, más allá de los previsibles contactos que puedan tener con el exterior, de donde —con toda seguridad— han importado la planificación, la técnica y la ejecución de sus ataques, cada vez más sofisticados y complejos. En este contexto, cobra relevancia el juramento de lealtad, en junio de 2019, de ASJW/*Al Shabaab* a *Daesh* central. A su vez, este incluyó al yihadismo de Mozambique en la autodenominada Provincia del Estado Islámico de África Central (ISCAP, por siglas en inglés) junto a las milicias de las Fuerzas Democráticas Aliadas que, tras décadas de lucha rebelde en la región de Kivu en la República Democrática del Congo, declaran ahora profesar la sinrazón yihadista. Sin embargo, y aunque el aparato mediático y propagandístico de *Daesh* ha reivindicado como propios

varios atentados en Mozambique, su conexión real con *Al Shabaab* y la vinculación de este con la ISCAP, aun siendo innegables, son todavía muy imprecisas. De hecho, esta relación interesada responde antes a la pretensión compartida de fortalecer el proyecto de la yihad global (en notorio declive en Oriente Medio, y en total expansión en África) que a un control efectivo o cualquier atisbo de subordinación, que —hasta la fecha— son difícilmente factibles.

AYUDA INTERNACIONAL

Desde 2017, la estrategia gubernamental de lucha contra el yihadismo se ha demostrado totalmente ineficaz, pero Maputo ha mantenido su obstinada actitud de minimizar la gravedad de la amenaza y denunciar que los extremistas violentos procedían del exterior. Mientras tanto, proclamaba que la situación estaba bajo control, con el objetivo de salvaguardar las cuantiosas inversiones extranjeras en la región norteña que debían convertirse en el pulmón económico de todo el país. Con este trasfondo, una controvertida reacción militar y policial determinó la respuesta oficial, que fue incapaz de aplacar la violencia contra una población hastiada e indefensa y, además, totalmente insuficiente para frenar el alistamiento de muchos jóvenes a la causa yihadista.

En febrero de 2021, ante el agravamiento de la situación en Cabo Delgado, el presidente Nyusi reforzó las acciones contra el terrorismo; pero —tan solo un mes después— el planeamiento y la agresividad de la acometida yihadista en la ciudad de Palma pusieron en evidencia la apremiante necesidad de contar con apoyo exterior para, como medida más urgente, colaborar en la neutralización de la amenaza y en la protección de la población local. Hasta entonces, y más allá de los acuerdos bilaterales con Tanzania para cooperar en la erradicación del terrorismo y del crimen organizado transfronterizo, la Unión Africana y la Comunidad para el

Desarrollo del África Austral (SADC) se habían limitado a mostrar su firme respaldo al Gobierno de Mozambique, pero sin adoptar medidas concretas de ayuda para enfrentar, de forma conjunta, la violencia yihadista.

En el plano bilateral, la primera ayuda exterior llegó desde Portugal, que ha liderado los esfuerzos para impulsar una mayor cooperación internacional con su antigua colonia. Tras firmar un nuevo acuerdo, que refuerza su cooperación militar con el Gobierno de Maputo, militares portugueses han comenzado a adiestrar a las fuerzas mozambiqueñas en el pasado mes de abril. Por su parte, Estados Unidos inició en marzo un programa de capacitación de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército

rán sus actividades con la Fuerza de la SADC, pero sin estar bajo su estructura de mando y control.

Por último, la Unión Europea ha mostrado su disposición a cooperar con el país africano desde que recibió, en octubre de 2020, la petición de ayuda del presidente Nyusi para enfrentar la violencia extremista en Cabo Delgado. Finalmente, el 12 de julio, aprobó el establecimiento de una misión de formación militar en Mozambique (EUTM Mozambique), que tendrá una duración inicial de dos años y cuyo objetivo es «capacitar y apoyar a las fuerzas armadas mozambiqueñas en la protección de la población civil y el restablecimiento de la seguridad en la provincia de Cabo Delgado».

De esta forma, y a la espera de que se apruebe el lanzamiento definitivo de la misión, la Unión Europea se prepara para desplegar —según lo previsto, en septiembre u octubre— su misión más austral en África, desde el convencimiento de que la seguridad y el desarrollo de ambos continentes están inexorablemente unidos. Por el momento, la comunidad internacional ha demostrado su solidaridad y compromiso con Mozambique en el ámbito de la seguridad, pero el esfuerzo será baldío si no media una estrategia integral de respuesta

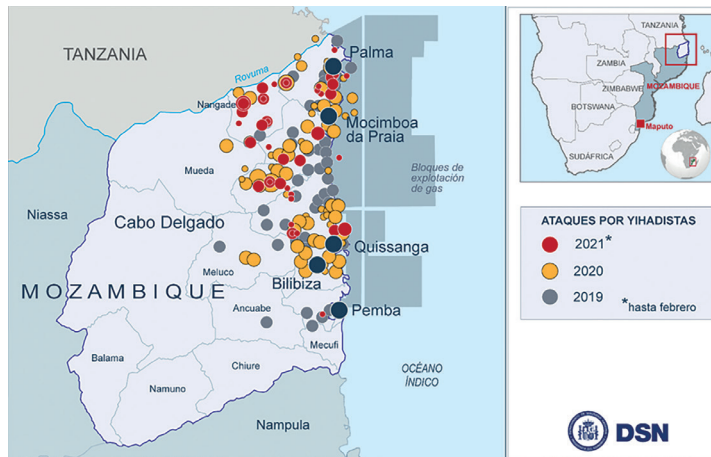
para erradicar la amenaza yihadista en el país, así como su expansión por todo el sur de África.

Para revertir esta alarmante situación, es imprescindible que, cuanto antes, el Gobierno de Maputo refuerce su presencia en Cabo Delgado y atienda al profundo descontento social, al sentimiento de frustración y a la falta de expectativas vitales que han permitido que arraigue entre la población una visión rigorista, excluyente y violenta del Islam. De lo contrario el ideario yihadista echará raíces más profundas y provocará más sufrimiento; y, por todo ello, será mucho más complejo y tardío lograr un desenlace concluyente

Jesús Díez Alcalde

Coronel del Ejército de Tierra. Analista del Departamento de Seguridad Nacional

ATENTADOS REGISTRADOS EN LA REGIÓN DE CABO DELGADO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS



de Mozambique, que realizará en distintos periodos de dos meses; Francia ha ofrecido el apoyo de sus buques de guerra desplegados en el Océano Índico en caso de que se solicite su asistencia; y, por último, es previsible que —por sus intereses en la zona— Rusia, China o la India también colaboren en la lucha contra el terrorismo yihadista.

En cuanto al apoyo regional, la SADC —en su cumbre extraordinaria celebrada el pasado 23 de junio— aprobó el despliegue inmediato de una Fuerza de Reserva, que podrá estar conformada por hasta 3.000 efectivos para combatir el extremismo violento en Cabo Delgado. Además, y por un acuerdo bilateral, Ruanda ya ha enviado a Mozambique un contingente de 1.000 soldados y policías, que coordina-